plaza pública para la edición del 16 de abril de 1993
% Elecciones potosinas
% Ilegalidades admitidas
miguel ángel granados chapa

Exactamente veinte meses después de las anteriores, y luego de once meses preciso de la muerte del doctor Salvador Nava, que las protagoniza no obstante su desaparición física, el próximo domingo habrá elecciones para gobernador en San Luis Potosí. Dos de los candidatos lo son en medio de un conflicto entre los hechos y la ley, aunque sólo la postulación del priísta Horacio Sánchez Unzueta pueda ser realmente tachada de violatoria de la legalidad.

Jorge Lozano Armengol, propuesto por Acción Nacional, no fue el más votado de los precandidatos de su partido. Tres veces, su adversario Alvaro Elías Loredo lo venció en la convención estatal de diciembre pasado. Pero ninguno de los dos obtuvo los dos tercios previstos en los exigentes estatutos panistas, y el comité nacional, su presidente mismo, debió resolver el conflicto. Don Luis H Alvarez no estaba obligado a escoger al que había recibido mayor asentimiento de sus partidarios. Pero hubiera sido acorde con la voluntad del panismo potosino proceder de esa manera. En cambio, se tuvieron presentes otros factores, y el precandidato minoritario quedó investido con la candidatura. No hay lesión a la legalidad interna. Sí hubo desatención al sentir mayoritario del segmento potosino del PAN.

En cambio, en el caso de Sánchez Unzueta se violó de modo evidente la ley. Esta --la Constitución misma, tanto la federal como la local-- dispone que el gobernador satisfaga uno de dos requisitos, el de oriundez o el de vecindad efectiva. Es decir, se reclama haber nacido en la entidad o haber residido en ella al menos cinco años, efectivamente. Sánchez Unzueta nació en Chihuahua, y su hoja de servicios muestra con claridad, y hasta ufanía del protagonista, que desempeñó varias funciones en el gobierno federal, con domicilio en la ciudad de México. Si bien radicó durante su niñez y primera juventud en San Luis Potosí, y volvió a esa ciudad luego de sus estudios de posgrado, su regreso lo retuvo sólo unos años en la capital potosina. Luego de renunciar al único cargo de importancia desempeñado por él en la política y la administración locales (secretario de Programación y Presupuesto durante cuatro meses, en 1985), salió de nuevo, a la capital de la República. Trabajó allí al lado de Camacho y de Zapata, en el Departamento del Distrito federal, y de Patricio Chirinos, al abandonar la filiación camachista que ostentó durante algunos años.

¿Por qué, a sabiendas de que Sánchez Unzueta no satisfacía los requisitos legales, el PRI lo postuló? No por falta de interesados en la candidatura. A pesar de que se

Elecciones...

hizo el interesante para ese efecto, el senador carlos Jiménez Macías hubiera acatado la voluntad que lo indujera a presentarse a las elecciones, a refrendar el triunfo que ya había obtenido en la misma jornada de la que Fausto Zapata salió impugnado. A pesar de que se le identificara plenamente con Camacho, Fernando Silva hubiera contribuido a restaurar la civilidad potosina, aquella que su maestro Antonio Rocha inauguró luego de la imposición de otro chihuahuense convertido a fuerza en gobernador de San Luis.

Sánchez Unzueta fue postulado por el PRI, a sabiendas de su vulnerabilidad jurídica, un poco por desprecio a la ley y un mucho por perverso, y fallido, cálculo político. Yerno como es de la señora Concepción Calvillo viuda de Nava, que se perfilaba como heredera del copioso caudal político de su marido, se quiso inhibir su candidatura al gobierno estatal. O convertir el enfrentamiento político entre ambos en anécdota trivial, en la "telenovela de suegra y yerno", como frívolamente se refiere al caso el candidato panista Lozano Armengol.

Este pudo haber ganado las elecciones si el navismo hubiera sido tan panista como el PAN creyó, y si hubiera sido eficaz su estrategia de combatir a la candidata navista con mayor ardor que al aspirante presentado por el PRI, cuando que la lógica impuesta por un partido dominante, arbitrariamente dominante, debiera presentar su expulsión del poder como la meta principal de la oposición. La candidatura propia del PAN no hará más que beneficiar al PRI, que pretenderá hacer gobernante a quien está legalmente descalificado para serlo.

plaza pública para la edición del 16 de abril de 1993
% Elecciones potosinas
% Ilegalidades admitidas
miguel ángel granados chapa

Exactamente veinte meses después de las anteriores, y luego de once meses precisos de la muerte del doctor Salvador Nava, que las protagoniza no obstante su desaparición física, el próximo domingo habrá elecciones para gobernador en San Luis Potosí. Dos de los candidatos lo son en medio de un conflicto entre los hechos y la ley, aunque sólo la postulación del priísta Horacio Sánchez Unzueta pueda ser realmente tachada de violatoria de la legalidad.

Jorge Lozano Armengol, propuesto por Acción Nacional, no fue el más votado de los precandidatos de su partido. Tres veces, su adversario Alvaro Elías Loredó lo venció en la convención estatal de diciembre pasado. Pero ninguno de los dos obtuvo los dos tercios previstos en el exigente estatuto panista, y el comité nacional, su presidente mismo, debió resolver el conflicto. Don Luis H Alvarez no estaba obligado a escoger al que había recibido mayor asentimiento de sus partidarios. Pero hubiera sido acorde con la voluntad del panismo potosino proceder de esa manera. En cambio, se tuvieron presentes otros factores, y el precandidato minoritario quedó investido con la candidatura. No hay lesión a la legalidad interna. Sí hubo desatención al sentir mayoritario del segmento potosino del PAN.

En cambio, en el caso de Sánchez Unzueta se violó de modo evidente la ley. Esta --la Constitución misma, tanto la federal como la local-- dispone que el gobernador satisfaga uno de dos requisitos, el de oriundez o el de vecindad efectiva. Es decir, se reclama haber nacido en la entidad o haber residido en ella al menos cinco años, efectivamente. Sánchez Unzueta nació en Chihuahua, y su hoja de servicios muestra con claridad, y hasta con ufanía del protagonista, que desempeñó varias funciones en el gobierno federal, con domicilio en la ciudad de México. Si bien radicó durante su niñez y primera juventud en San Luis Potosí, y volvió a esa ciudad luego de sus estudios de posgrado, su regreso lo retuvo sólo unos años en la capital potosina. Luego de renunciar al único cargo de importancia desempeñado por él en la política y la administración locales (secretario de Programación y Presupuesto durante cuatro meses, en 1985), salió de nuevo, a la capital de la República. Trabajó allí al lado de Camacho y de Zapata, en el Departamento del Distrito federal, y de Patricio Chirinos, al abandonar la filiación camachista que ostentó durante algunos años. Su segundo retorno a San Luis data de hace apenas dos años, cuando representó a Fausto Zapata en el organismo electoral local, y fue candidato a diputado federal.

cajón de sastre

Anoche se instaló frente a la Secretaría de Gobernación el plantón con que miembros del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero buscan hacerse oír en su reclamación destinada a que renuncie el nuevo gobernador de esa entidad. A buena parte de los medios de información, y a no pocos ciudadanos, parece hartarles la cansina repetición de lo que llaman "cantaletas", con ánimo de disminuir la calidad de la protesta. Para examinar las secuelas de una elección es imprescindible examinar el fenómeno como un todo. De esa manera se comprende que si hay una "tediosa" actitud de inconformidad con los resultados de los comicios, eso se debe a que hay una no menos terca insistencia en practicar formas de selección de candidatos y de campañas electorales que lastiman a la población. Se ha caminado, no tanto en Guerrero como en San Luis Potosí, a una situación paradójica, fruto de una habilidosa capacidad de respuesta de las autoridades. En ambos sitios fue modificada la campaña electoral, y se impregnó de un nuevo tono a los organismos encargados de los comicios. De esa manera, la protesta parece injustificada.

Exactamente veinte meses después de las anteriores, y luego de once meses precisos de la muerte del doctor Salvador Nava, que las protagoniza no obstante su desaparición física, el próximo domingo habrá elecciones para gobernador en San Luis Potosí. Dos de los candidatos lo son en medio de un conflicto entre los hechos y la ley, aunque sólo la postulación del priista Horacio Sánchez Unzueta pueda ser realmente tachada de violatoria de la legalidad.

Jorge Lozano Armengol, propuesto por Acción Nacional, no fue el más votado de los precandidatos de su partido. Tres veces, su adversario Alvaro Elías Loredó lo venció en la convención estatal de diciembre pasado. Pero ninguno de los dos obtuvo los dos tercios previstos en el exigente estatuto panista, y el comité nacional, su presidente mismo, debió resolver el conflicto. Don Luis H. Álvarez no estaba obligado a escoger al que había recibido mayor asentamiento de sus partidarios. Pero hubiera sido acorde con la voluntad del panismo potosino proceder de esa manera. En cambio, se tuvieron presentes otros factores, y el precandidato minoritario quedó investido con la candidatura. No hay lesión a la legalidad interna. Sí hubo desatención al sentir mayoritario del segmento potosino del PAN.

En cambio, en el caso de Sánchez Unzueta se violó de modo evidente la ley. Esta -la Constitución misma, tanto la federal como la local- dispone que el gobernador satisfaga uno de dos requisitos, el de oriundez o el de vecindad efectiva. Es decir, se reclama haber nacido en la entidad o haber residido en ella al menos cinco años, efectivamente. Sánchez Unzueta nació en Chihuahua, y su hoja de servicios muestra con claridad, y hasta con ufanía del protagonista, que desempeñó varias funciones en el gobierno federal, con domicilio en la ciudad de México. Si bien radicó durante su niñez y primera juventud en San Luis Potosí, y volvió a esa ciudad luego de sus estudios de posgrado, su regreso lo retuvo sólo unos años en la capital potosina. Luego de renunciar al único cargo de importancia desempeñado por él en la política y la administración locales (secretario de Programación y Presupuesto durante cuatro meses, en 1985), salió de nuevo, a la capital de la República. Trabajó allí al lado de Camacho y de Zapata, en el Departamento del Distrito Federal, y de Patricio Chirinos, al abandonar la filiación camachista que ostentó durante algunos años. Su segundo retorno a San Luis data de hace apenas dos años, cuando representó a Fausto Zapata en el organismo electoral local, y fue candidato a diputado federal.

¿Por qué, a sabiendas de que Sánchez Unzueta no satisfacía los requisitos legales, el PRI lo postuló? No por falta de interesados en la candidatura. A

pesar de que se hizo de rogar para ese efecto, el senador Carlos Jiménez Macías hubiera acatado la voluntad que lo indujera a presentarse a las elecciones, a ver si refrendaba el triunfo que ya había obtenido en la misma jornada de la que Fausto Zapata salió impugnado. A pesar de que se le identificara plenamente con Camacho (y eso, paradójicamente, lo estorbara), Fernando Silva hubiera contribuido a restaurar la civilidad potosina, aquella que su maestro Antonio Rocha inauguró luego de la imposición de otro chihuahuense convertido a fuerza en gobernador de San Luis, Manuel López Dávila. (Aunque nació en San Luis, fue en el estado norteño donde López Dávila, el impuesto en 1961, desarrolló su carrera, y allí hubiera deseado ejercer la gubernatura).

Sánchez Unzueta fue postulado por el PRI, a sabiendas de su vulnerabilidad jurídica, un poco por desprecio a la ley y un mucho por perverso, y fallido, cálculo político. Yerno como es de la señora Concepción Calvillo viuda de Nava, que se perfilaba como heredera del copioso caudal político de su marido, se quiso inhibir su candidatura al gobierno estatal. O convertir el enfrentamiento político entre ambos en anécdota trivial, en la "telenovela de suegra y yerno", como frívolamente se refiere al caso el candidato panista Lozano Armengol.

Este pudo haber ganado a los electores si el navismo hubiera sido tan panista como el PAN creyó, y si hubiera sido eficaz su estrategia de combatir a la candidatura navista con mayor ardor que al aspirante presentado por el PRI, cuando que la lógica impuesta por un partido dominante, arbitrariamente dominante, debiera presentar su expulsión del poder como la meta principal de la oposición. La candidatura propia del PAN no hizo más que beneficiar al PRI, que pretenderá hacer gobernante a quien está legalmente descalificado para serlo.

El Nava Partido Político oportunamente impugnó el registro de Sánchez Unzueta. Pero tanto el Consejo Estatal Electoral, como el Tribunal respectivo, desecharon la demanda navista. Impedidos como estaban de negar las causas de la impugnación (pues resulta imposible probar que el candidato priista nació en San Luis o vivió allí de verdad a partir del 18 de abril de 1988), no entraron a resolver el fondo del asunto. Desecharon la petición navista por "notoriamente infundada", alegando que la decisión no le causa perjuicio alguno. Las resoluciones de esos dos órganos tienen valor formal, aunque carezcan de sindéresis, respecto del candidato. Pero si el priista gana la elección, será posible enarbolar de nuevo la impugnación, pues no puede ser gobernador quien infrinja la ley.

Parece estar abierta así la puerta para un nuevo, y fatigoso, tramo de lucha poselectoral.